

relativo á la Vicepresidencia de la República. En cuanto al decreto de 16 de Abril de 1853, no merece ser examinado desde el punto de vista y con el tema de que tratamos, pues su índole eminentemente despótica explica todo atropello que pueda haberse cometido al establecer las disposiciones que regirán la substitución de la Presidencia de la República.

Veamos ahora cómo quedó establecida la mencionada substitución por la Constitución de 5 de Febrero de 1857, antes de ser reformada. Dice el artículo original de dicha Constitución: "Art. 79. En las faltas temporales del Presidente de la República, y en la absoluta, mientras se presenta el nuevamente electo, entrará á ejercer el poder el Presidente de la Suprema Corte de Justicia."

En virtud del artículo que acabamos de transcribir, la substitución del Presidente quedaba prevista, siendo el substituto un funcionario con origen de elección popular: pero, ¿es el Presidente de la Suprema Corte de Justicia el funcionario lógicamente abocado á desempeñar las funciones del Jefe del Poder Ejecutivo en un momento dado? Las atribuciones del Poder Judicial son muy distintas de las del Poder Ejecutivo y, por ende, diversas son también las esferas de acción de cada uno de esos Poderes, siendo á su vez diferentes las aptitudes y las condiciones que se deben exigir á los individuos que han de desempeñar cada una de dichas funciones. Es muy posible que un ciudadano probo, enérgico, laborioso profundamente conocedor de la ciencia jurídica, que, por tales virtudes, aparezca y sea realmente inmejorable para presidir el Poder Judicial, carezca del tacto político, del prestigio netamente popular y de la diversa y delicada experiencia que se requiere para desempeñar las funciones del Jefe del Poder Ejecutivo. Algún ejemplo elocuente, de este caso, pudiéramos citar en nuestra historia nacional relativamente reciente. Por otra parte, la completa independencia que la Constitución concede á los Poderes Federales entre sí, podía, dadas las condiciones peculiares del carácter ibero-americano, originar rozamientos y hasta producir antagonismos permanentes entre uno y otro Poder: y este caso aparece evidentemente ilógico y peligroso para la buena marcha de la administración pública, que el Jefe del Poder Judicial haya de substituir en un momento dado al del Poder Ejecutivo.

Estas razones generales y otras de índole puramente temporal y quizá transitoria, pero de peso no menor, movieron á nuestros legisladores á modificar la prescripción constitucional á que venimos refiriéndonos, y así lo hicieron en 3 de Octubre de 1882, redactando el artículo constitucional, en la parte conducente, de la siguiente manera: "En las faltas temporales del Presidente de la República, y en la absoluta, mientras se presenta el nuevamente electo, entrará á ejercer el Poder Ejecutivo de la Unión el ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente ó Vicepresidente del Senado ó de la Comisión Permanente en los períodos de receso, durante el mes anterior á aquél en que ocurran dichas faltas."

El cuerpo legislativo establece, después, algunas condiciones reglamentarias que aclaran y definen el carácter de un Presidente ó Vicepresidente del Senado ó de la Comisión Permanente.

Nuestra Constitución no había establecido nunca, como lo ha hecho la francesa, por ejemplo, presidencia nata de la Cámara, por manera que las Cámaras mexicanas varían con frecuencia de presidentes. Así las cosas, la reforma constitucional que acabamos de citar empeoraba, si cabe, las deficiencias de que adolecía la substitución del Poder Ejecutivo, y aumentaba los peligros para la Nación en caso de que hubiera de apelarse á la aplicación del artículo reformado. Si, en efecto, la persona de un buen Presidente de la Suprema Corte de Justicia no en todos los casos podía ofrecer las garantías ni ostentar las cualidades y aptitudes imperiosamente requeridas en un Jefe del Ejecutivo, menos aún era probable unas y otras en la persona de un Presidente del Senado ó de la Comisión Permanente, persona electa para plazo breve y sólo entre un número determinado de ciudadanos. Quiso la dicha de México que, durante el tiempo que estuvo vigente esta ley, no fuera necesario aplicarla, que de otra suerte hubiésemos sufrido hondos trastornos, "mientras" se presentaba el Presidente nuevamente electo.

Gracias á la hábil y por todos aceptada gestión administrativa del Sr. General Díaz y en vista de su salud y de su edad, que prometían una larga era de tranquilidad y de sosiego, la preocupación de establecer más euerdamente la substitución presidencial no parecía torturar el espíritu de la mayor parte de los ciudadanos: pero si estaba latente en aquéllos cuya experiencia les hace juzgar más el fondo de las cosas, que las apariencias temporales y locales. Así fué que, en 24 de Abril de 1896, el Congreso Nacional modificó nuevamente el delicado art. 79 de la Constitución, cimentándolo sobre las siguientes bases fundamentales:

I.—En las faltas absolutas del Presidente, con excepción de la que proceda de renuncia y en las temporales, con excepción de la que procede de licencia, se encargará desde luego del Poder Ejecutivo el Secretario de Relaciones Exteriores, y si no lo hubiere ó estuviere impedido, el Secretario de Gobernación.

II.—El Congreso de la Unión se reunirá en sesión extraordinaria al día siguiente, en el local de la Cámara de Diputados, con asistencia de más de la mitad del número total de los individuos de ambas Cámaras; fungiendo la Mesa de la Cámara de Diputados. Si por falta de quórum ó otra causa no pudiere verificarse la sesión, los presentes compelerán diariamente á los ausentes, conforme á la ley, á fin de celebrar la sesión lo más pronto posible.

III.—En esta sesión se elegirá Presidente substituto, por mayoría absoluta de los presentes y en votación nominal y pública, sin que pueda discutirse en ella proposición alguna, ni hacerse otra cosa que recoger la votación, publicarla, formar el escrutinio y declarar el nombre del electo.

VII.—En caso de falta absoluta por renuncia del Presidente, el Congreso se reunirá en la forma expresada para nombrar el substituto, y la renuncia no surtirá sus efectos sino hasta que quede hecho el nombramiento y el substituto preste la protesta legal).

VIII.—En cuanto á las faltas temporales, cualquiera que sea su causa, el Congreso nombrará un Presidente interino, observando el mismo procedimiento prescripto para los casos de falta absoluta. Si el Presidente pidiere licencia, propondrá, al hacerlo, al ciudadano que deba reemplazarlo, y concedida que sea, no comenzará á surtir sus efectos sino hasta que el interino haya protestado, siendo facultativo por parte del Presidente hacer ó no uso de ella ó abreviar su duración. El interino ejercerá el cargo tan sólo mientras dure la falta temporal.

respect to the Vice-Presidency of the Republic. With regard to the decree of April 16, 1853, the same does not merit any mention, from the stand point and position we have taken, for its spirit of an eminently despotic character is an explanation of all the trespasses which may have been committed in establishing the provisions to rule the filling of the vacancy of the office of President of the Republic.

Let us now see how the proceedings for the above substitution were established, by the Constitution of February 5, 1857, prior to the time of its amendment. The original article of said Constitution, reads as follows: "Article 79.—During the temporary absence of the President of the Republic, and in cases of absolute default, his power shall devolve upon the Chief Justice of the Supreme Court of Mexico, until the new man is elected."

By virtue of the above mentioned article, provision was made for the substitution of the President, his successor being a functionary elected by popular vote: but, is the Chief Justice of the Supreme Court the functionary logically adapted to perform the duties, at a given moment, of the Chief Executive? The functions of the Judicial Power are very different from those of the Executive and, furthermore, the scope of action of both of said powers is also different, for which reason the ability and conditions of the persons who are to fill each of the above offices are of a different character. It is possible that an honest, energetic and hard-working citizen, who may possess a deep knowledge of juridical science and who, by reason of the above accomplishments may appear to be a person really unsurpassable for the office of Chief of the Judicial Power, but who may be lacking in political tact, in a truly popular prestige and in the varied and delicate experience required to perform the functions of Chief of the Executive Power. We could offer quite a recent example, of such a case as the above, in our national history. On the other hand, the complete independence which the Constitution grants to the Federal Powers between one another, could, owing to the peculiar conditions of temperament of the Spanish-American people, cause friction and go as far as to create permanent rivalry between one power and the other; and for that reason it appears evidently illogical and dangerous for the good course of public government, to have the Chief of the Judicial Power substitute at any given moment the Chief Executive of the Nation.

The above general reasons and others of a purely momentous and even temporary character, but of no less weight, moved our legislators to amend the constitutional provision herein-before mentioned, and thus, on October 3, 1882, the Article of the Constitution relative to the matter was amended to read: "During the temporary and absolute default of the President of the Republic, and until his successor has been elected and qualified, the power of the Union shall devolve upon the citizen who may have performed the duties of President or Vice-President of the Senate, or of the Permanent Commission in the periods of recess, during one month prior to that in which said default may occur."

After that, the Legislative body established several reglementary provisions which serve to elucidate and define the qualifications of a President and Vice-President of the Senate, or of the Permanent Commission.

Our Constitution never did establish, as does the French, a regular office of President of the Chambers of Congress, for which reason the Mexican House and Senate change their presidents periodically. In such state of affairs, the constitutional amendment we have just mentioned, increased, so to say, the difficulties attending the substitution of the President, it increased also the dangers for the Nation in case the application of the above article of the Constitution had to be made. If, as a matter of fact, a good Chief Justice of the Supreme Court of Mexico could not in every case offer the necessary safety nor possess the qualifications and ability required most forcibly of a Chief Executive, it was still more improbable to find, any of them in the person of a President of the Senate or of the Permanent Commission, elected to hold office for a short time and among a limited number of citizens. It was Mexico's good fortune that, during the existence of the above law, its application was unnecessary, otherwise we would have had to suffer serious disturbances, "until" the newly elected President would qualify.

Thanks to the able and by all-commended administration of General Díaz, and in view of his good health and age which promised to the country a long era of peace and welfare, the matter of establishing a better form to substitute the President did not cause any mental worry for the greater part of the citizens of Mexico; but it did agitate in the minds of those whose experience makes them judge the merits of all questions, much deeper than they do the external and local conditions. Therefore, on April 24, 1896, the National Congress, made a new amendment to the important Article No. 79 Of the Constitution, basing it upon the following fundamental principles:

I.—In case of absolute default on the part of the President, except that arising from his resignation, and during temporary vacancies, excepting those when on leave of absence, the Executive Power shall devolve upon the Secretary for Foreign Affairs, and should there not be one or should he be under disability, the Secretary of Government shall act as President.

II.—The National Congress shall convene on the following day, and hold an extraordinary session, in the building used as Chamber of Deputies, with an attendance of more than one half of the total number of members of the House and Senate, presided by the Speaker of the Chamber of Deputies. If on account of the lack of quorum or of other cause the session could not be held, those present shall daily compell absent members to attend, according to law, in order that the session be held as soon as possible.

III.—During this session a substitute to the President shall be elected by an absolute majority of the votes present, the voting to be made by voice and publicly, and no motion of any kind shall be discussed at said session, as the only action permitted shall be that of taking down the votes, counting them and giving out the results and the name of the person elected.

VII.—In the case of permanent vacancy on account of the resignation of the President, Congress shall convene in the form hereinbefore mentioned to appoint his successor, and his resignation shall not be valid until after the substitute has been appointed and taken the legal oath.

VIII.—With respect to temporary vacancy, whatever the cause of the same may be, the President shall appoint a President *ad interim*, following the same procedure observed in the cases of permanent default. When the President asks for a leave of absence, he shall propose the citizen who may act as his substitute, and when the leave is granted, the same shall not be in force until the President *ad interim* has taken the legal oath, it being the privilege of the President to make use or not of his leave or to shorten its duration. The substitute shall only exercise the powers of President so long as the temporary vacancy may last.